

XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 2013.

Burguesía agraria e industrial en el retorno del peronismo.

Baudino y Verónica.

Cita:

Baudino y Verónica (2013). *Burguesía agraria e industrial en el retorno del peronismo*. XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-010/721>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

**XIV Jornadas
Interescuelas/Departamentos de Historia
2 al 5 de octubre de 2013**

ORGANIZA:

Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras

Universidad Nacional de Cuyo

Número de la Mesa Temática: 84

Título de la Mesa Temática: **Transformaciones agrarias en perspectiva regional. Tierra, productores, Estado y mercado. Argentina, siglos XX y XXI.**

Apellido y Nombre de las/os coordinadores/as:

Dra. Silvia Lázzaro (CONICET/UNLP)

Dra. Mónica Blanco (CONICET/UNCPBA)

Dra. Graciela Blanco (CONICET/UNCo)

TÍTULO DE LA PONENCIA

Burguesía agraria e industrial en el retorno del peronismo

Corporaciones empresarias, alianzas sociales y disputas políticas (1969-1974)

*Apellido y Nombre del/a autor/a
Baudino, Verónica
Sanz Cerbino, Gonzalo*

Pertenencia institucional

IDIHCS/CONICET

IEALC-CONICET

Correo electrónico

veronicabaudino@yahoo.com.ar

<http://interesculashistoria.org/>

La crisis política que siguió al estallido del proceso insurreccional a fines de la década de 1960 en la Argentina, cuya máxima expresión fue el Cordobazo, llevó a una serie de realineamientos en el campo corporativo burgués. Muchas de las fracciones del empresariado que hasta ese momento habían sostenido el régimen dictatorial, o que lejos estaban de abonar una salida democrática y reformista, fueron modificando sus posiciones y reubicándose en el campo de alianzas. Estos movimientos no han sido abordados en profundidad por la bibliografía existente. Los estudios clásicos sobre el retorno del Peronismo se han concentrado en otros aspectos de la transición, como los alineamientos de las fuerzas políticas o la coyuntura económica.¹ Incluso quienes destacan la participación de la burguesía en la alianza peronista no han realizado una reconstrucción minuciosa de los apoyos en este terreno.² La bibliografía sobre corporaciones empresarias, al centrarse en estudios de caso, no avanzó en la reconstrucción de los movimientos de conjunto.³ En el otro extremo, algunos trabajos que han intentado dar cuenta de los alineamientos de las alianzas sociales en términos más generales, no se detuvieron en las particularidades del

¹De Riz, Liliana: Retorno y derrumbe. El último gobierno peronista, Hyspamérica, Buenos Aires, 1987; Di Tella, Guido: Perón-Perón, 1973-1976, Hyspamérica, Buenos Aires, 1985.

²Sidicaro, Ricardo: Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55/1973-76/1989-99, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002; Peralta Ramos, Mónica: La economía política argentina: poder y clases sociales (1930-2006), FCE, Buenos Aires, 2007.

³Palomino, Mirta: Tradición y Poder: La Sociedad Rural Argentina (1955 – 1983), CISEA-GEL, Buenos Aires, 1988; Palomino, Mirta: Organizaciones corporativas del empresariado argentino. CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) 1955-1983, CISEA, Buenos Aires, 1989; Schvarzer, Jorge: Estructura y comportamiento de las grandes corporaciones empresarias argentinas (1955-1983). Un estudio desde dentro para explorar su relación con el sistema político, CISEA, Buenos Aires, 1990; Brennan, James: “Industriales y ‘bolicheros’: la actividad económica y la alianza populista peronista, 1943-1976”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Tercera Serie, N° 15, 1er. Semestre de 1997.

proceso.⁴ El resultado concreto es que, o bien el apoyo empresario al retorno del Peronismo se circunscribe a aquellos ligados a la Confederación General Económica (CGE). O, cuando se reconocen otros sustentos (la Unión Industrial Argentina –UIA-, o las corporaciones agrarias), se les da a estos un carácter circunstancial y “oportunista”. Consideramos que una reconstrucción exhaustiva de este problema es imprescindible para entender en su totalidad cómo y por qué el Peronismo, condenado al ostracismo durante 20 años, asomó en la coyuntura de 1971-1973 como única alternativa para conjurar la crisis social. A ello nos abocaremos en las páginas que siguen.

Crisis hegemónica y restauración democrática

Entre 1953 y 1976 el capitalismo argentino se debatió en una crisis que se expresó a varios niveles. En el plano económico, nos encontramos frente a una crisis de acumulación: un devenir errático, con fases de crecimiento que rápidamente trocaron en bruscos descensos de todas las variables, empujadas por una crisis crónica del sector externo. Esto dio lugar a violentas pujas sociales. La lucha de clases se intensificó, expresándose claramente en dos niveles: la disputa entre burguesía y proletariado, y hacia el interior de la burguesía. El incremento de los enfrentamientos sociales explica la inestabilidad política que caracterizó al período.⁵ La dictadura encabezada por el General Onganía, que contó con amplio respaldo, se dispuso a restablecer la hegemonía y las condiciones generales de acumulación de capital. Las primeras medidas del gobierno de facto cumplieron con el objetivo de reestablecer el orden: se disolvieron los partidos políticos y el parlamento, y se intervinieron las universidades, único foco opositor. Las corporaciones empresarias respaldaron abiertamente el golpe que habían impulsado. La Confederación General del

⁴O'Donnell, Guillermo: “Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976”, en Catacumbas, Prometeo, Buenos Aires, 2008; O'Donnell, Guillermo: El estado burocrático autoritario, Prometeo, Buenos Aires, 2009; Acuña, Carlos: “Las contradicciones de la burguesía en el centro de la lucha entre el autoritarismo y la democracia (1955 – 1983)”, Realidad Económica, N° 138, 1996.

⁵Los distintos niveles de crisis han sido analizados por varios autores, entre los que se destaca O'Donnell, El Estado..., op. cit., pp. 37-59.

Trabajo (CGT), dominada por el Peronismo, que en un primer momento buscó un acercamiento a las nuevas autoridades, fue rápidamente derrotada y perseguida. El gobierno comenzó a poner en práctica una política de racionalización del gasto y la administración pública, y mediante un nuevo plan de estabilización, logró congelar salarios por dos años. El paso previo imprescindible fue el avance represivo sobre el movimiento obrero, que garantizó una *pax militar* que se mantuvo por casi tres años.⁶

Pero la estabilidad conquistada a sangre y fuego pereció pronto. Las contradicciones sociales reprimidas estallaron en 1969, reabriendo la crisis política e inaugurando un nuevo ciclo de enfrentamientos. La insurrección en Córdoba de mayo de 1969 imprimió un quiebre en el proceso político. No fue un hecho aislado, sino el emergente de una activación política de distintas fracciones de la clase obrera y de la pequeña burguesía, que se manifestó en movilizaciones, huelgas, tomas de fábricas, acciones armadas e insurrecciones locales. La confluencia de estos sectores, que impugnaban violentamente el régimen político y en muchos casos, el conjunto del orden existente, tuvo un denominador común: la tendencia a la acción directa, difícil de encausar dentro de los marcos del sistema. Podemos hablar de la constitución de una nueva alianza, en la que obreros, profesionales y estudiantes comenzaron a desplegar una acción independiente de las distintas fracciones de la clase dominante y disputaban, en la práctica, el poder social. La Argentina se encontraba ante la apertura de un proceso revolucionario.⁷

El Cordobazo también abrió una crisis de régimen político. Tras la insurrección, Onganía se vio obligado a desprenderse de su alfil, el ministro de Economía Krieger Vasena. En un intento por contener el ascenso de la lucha de clases, debió anunciar la apertura del “tiempo social”, habilitando la discusión sobre aumentos salariales y otras concesiones, como la Ley de Obras Sociales. La inflación volvió a la palestra y se acentuaron los cuestionamientos de

⁶O'Donnell, El Estado..., op. cit., pp. 111-151.

⁷Los fundamentos de esta caracterización han sido expuestos por varios autores, entre los que se destacan: Portantiero, Juan Carlos: “Clases dominantes y crisis política en la Argentina”, en Braun, Oscar: El capitalismo argentino en crisis, Siglo XXI, Buenos Aires, 1973; Marín, Juan Carlos: Los hechos armados. Un ejercicio posible, La Rosa Blindada/PICASO, Buenos Aires, 2003; Balvé, Beba y Beatriz Balvé: El '69. Huelga política de masas, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2005.

distintas fracciones de la burguesía. Al calor de la suba de precios, se desató nuevamente la puja por mejorar los salarios, acompañada por una reactivación sindical que empujaba a la CGT hacia la lucha económica. Las internas en las FF.AA. se reabrieron. Onganía fue depuesto por un golpe interno un año después del Cordobazo, y su sucesor, Levingston, duró en el cargo apenas unos meses. Un nuevo golpe interno, en marzo de 1971, puso al frente del Ejecutivo a Alejandro Agustín Lanusse, quien sin más aire para resucitar el régimen, abrió el proceso de transición democrática que dos años después pondría al Peronismo nuevamente en el gobierno.⁸

La apertura de un proceso revolucionario y la crisis de régimen afectaron profundamente a la burguesía, reabriendo enfrentamientos internos que se arrastraban desde los '50, protagonizados por la CGE y ACIEL (Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres). La primera corporación, creada durante las presidencias peronistas, nucleaba a los empresarios afines al proyecto reformista. Aunque tenía cierta inserción en el agro y en el comercio, hacía pie fundamentalmente en los industriales orientados a la producción para el mercado interno. La supervivencia de estos sectores dependía fuertemente de la protección estatal, financiada con los ingresos provenientes de la renta de la tierra. La crisis económica, que ponía en cuestión la capacidad del Estado para seguir sosteniendo a estas capas, las llevaba a un movimiento defensivo en el cual, apoyándose en la alianza con la clase obrera, buscaban impedir la aplicación de medidas que abrieran un proceso de concentración y centralización del capital, que los llevaría a la quiebra. Cerca de este polo podemos ubicar también a la Federación Agraria Argentina (FAA) y a CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria). Ambas reunían a la burguesía agraria de menor tamaño, propietaria y no propietaria, que mantenían un enfrentamiento con la gran burguesía agraria en lo referente a dos cuestiones: la forma de resolver el conflicto por los arriendos congelados desde los '40, y la distribución interna de la carga impositiva que pesaba sobre el sector.

Del otro lado se ubicaban la gran burguesía terrateniente, nucleada en SRA (Sociedad Rural Argentina) y CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), los grandes industriales que militaban en la UIA, y el gran capital comercial y financiero (representados por la Bolsa de

⁸O'Donnell, El Estado..., op. cit.

Comercio y por la Cámara Argentina de Comercio –CAC-). Estas corporaciones, en 1958, dieron forma a ACIEL, en respuesta a la restitución de la personería gremial a la CGE. Las unían sus concepciones “liberales”, con los límites que ello tenía, sobre todo para corporaciones como la UIA, que por la baja competitividad de sus capitales demandaban ciertos niveles de protección del mercado interno. En la Argentina de ese momento, reivindicarse “liberal” implicaba una acérrima oposición a la restauración del reformismo peronista, que adquiriría una clara expresión en el programa original del frondicismo, su acuerdo electoral con Perón y la legalización de la CGE.

En líneas generales, asistimos al combate entre dos programas que se proponían como solución a la crisis: el programa reaccionario (o “liberal”) y el programa reformista, que tuvieron carnadura en dos fuerzas sociales. El primero, que se expresaba, no sin contradicciones, en ACIEL, postulaba que la única alternativa consistía en “sanear” la economía. Esto implicaba, en primer lugar, eliminar o recortar drásticamente las transferencias destinadas a sostener los capitales menos eficientes. Es decir, reducir la protección del mercado interno, abriendo parcialmente la importación y bajando las barreras cambiarias y arancelarias. A su vez, postulaba un recorte en los gastos improductivos del Estado: los subsidios a la industria mercado-internista y el salario indirecto. De esta manera, se liberaba a la burguesía agropecuaria e industrial más grande de sostener mediante distintos mecanismos (impuestos, retenciones, sobrepuestos pagados en el mercado interno por los efectos de la protección), el lastre de la industria no competitiva. Este programa planteaba, en síntesis, abrir un proceso de concentración y centralización del capital, que permitiera relanzar sobre nuevas bases la acumulación. También implicaba un avance sobre la clase obrera, a través de la baja del salario real y de transferencias estatales. Este avance cobraba forma en el ataque a las conquistas obtenidas bajo el Peronismo y a la organización sindical. A su vez, la eliminación de los capitales más chicos implicaba quiebras y cierres de plantas, que abrían las puertas a un sinceramiento de la población sobrante para el capital. Así, la consumación del programa reaccionario contenía la posibilidad de un aumento sustantivo de la desocupación, alimentando el ejército industrial de reserva que operaría, a su vez, llevando los salarios a la baja.

El programa de esta alianza fue asociado a los postulados del liberalismo, aunque observamos que no encaja claramente allí. Aunque esta corriente suele levantar como

bandera el retiro del Estado, por las características altamente impopulares de su propuesta demandaba un Estado fuerte, para contener y reprimir las reacciones al plan. Por otro lado, porque los intentos de aplicación concreta del programa nunca avanzaron decididamente hacia una eliminación total de la protección a la industria. El problema es que en la Argentina casi la totalidad del capital industrial, tanto nacional como extranjero, era incapaz de competir a escala internacional y demandaba protección y transferencias. La burguesía industrial más concentrada a escala local, al ingresar en la alianza, impedía desarrollar el programa hasta sus últimas consecuencias.

Este programa encontró un freno, al decir de O'Donnell, en la estructuración de una "alianza defensiva" identificada con el Peronismo, que a pesar de no poder relanzar la acumulación de capital, tenía la fuerza suficiente para evitar la expropiación de las fracciones atacadas por la alianza reaccionaria. Su programa se estructuraba en torno a la defensa del mercado interno. Por un lado, postulaba la necesidad de mantener o aumentar las transferencias de renta destinadas a subvencionar a los capitales más débiles, en todas sus formas. O sea, sostener un nivel elevado de gastos estatales que impulsara la demanda y subvencionara al capital ineficiente, y la protección de la competencia externa mediante un tipo de cambio alto y aranceles a la importación. A su vez buscaba, a través del Estado, imponer un freno a la concentración, impidiendo la absorción de los capitales débiles por los más fuertes. Por último, planteaba como concesión a la clase obrera la defensa del salario real y las conquistas sindicales, que servían para recrear el mercado interno y sostener la demanda. En el interior de esta alianza, la disputa pasaba por la forma en que se distribuían los ingresos entre sus componentes: la burguesía industrial chica se enfrentaba a la clase obrera, y ambos a la burguesía agropecuaria más pequeña, que aspiraba a que sean sus pares de mayor tamaño los que paguen los platos rotos.

A diferencia de la fuerza social reaccionaria, la reformista contaba con un programa que permitía aglomerar una masa crítica capaz de imponerse políticamente. Se reservaba una carta decisiva: el poder de movilización de una clase obrera organizada y homogénea que mayoritariamente adscribía a él. Por esa razón, sus antagonistas debieron imponerse de la mano de las intervenciones militares y la represión, o sostenerse precariamente con una democracia restringida, que vedaba la participación de la expresión política de la alianza reformista: el Peronismo. Esta capacidad de movilización permitió a los componentes de la

alianza reformista impedir la aplicación del programa reaccionario, que ante cada intento explotó sumido en contradicciones sociales. Sin embargo, la debilidad del programa reformista radicaba en su incapacidad para dar una salida a la crisis económica. Ante la caída de los precios agrarios internacionales, no había manera de sostener las transferencias hacia la burguesía ineficiente y la clase obrera. Si la aplicación del programa “concentrador” terminaba abortándose por la reacción popular, el programa reformista, que parecía viable cuando la renta subía, fracasaba con el estallido de la inflación, la crisis de balanza de pagos y el déficit fiscal, cuando ésta caía.

La resurrección de la alianza reformista

Aunque las críticas de la CGE a las políticas implementadas por Krieger Vasena se hicieron sentir tempranamente, cuestionando particularmente las medidas que tendían a “desproteger” a la pequeña y mediana industria cuya representación se arrogaba,⁹ es recién con el Cordobazo que emerge una impugnación global al programa económico de la Revolución Argentina. La dirigencia de la entidad aprovechó el espacio político que abría la creciente conflictividad social para comenzar a plantear una alternativa que la tuviera como protagonista. Abonando a la construcción de esa alternativa, la CGE buscó restablecer los lazos con la CGT y con el Peronismo.

Su balance del Cordobazo, que coincidía con el de la CGT, cargaba las tintas sobre la gestión de Krieger Vasena, adjudicando la explosión social a la política económica “liberal”, “extrajerezante” y carente de “contenido social” promovida por el entonces ex ministro.¹⁰ La crítica se hizo extensiva al sucesor de Krieger Vasena, Dagnino Pastore, denunciando que ponía la estabilidad monetaria como “fin primordial y a cualquier costo”.¹¹ Para resolver la crisis proponían un programa de “desarrollo planificado” elaborado con la plena participación de “todos los sectores”.

⁹La Nación, 28/1/1968, 19/1/1969 y 23/4/1969.

¹⁰O'Donnell, El estado burocrático..., p. 235; Brennan, op. cit, pp. 131-132.

¹¹Cronista Comercial, 13/1/1970.

Tras el Cordobazo, la CGE comenzó a buscar restablecer las relaciones con la CGT, que se habían “enfriado” con la ofensiva represiva de Onganía. El contexto socio-político abría una serie de alternativas para el movimiento obrero organizado: por un lado, su radicalización, a la que la llevaba el recurso a la acción directa impuesto desde 1969. Por esta vía, el enfrentamiento al gobierno y al régimen dictatorial podía derivar en una confrontación abierta con la burguesía, que llevaría a la clase obrera a un cuestionamiento del sistema social capitalista en su conjunto. Pero esa activación social podía canalizarse también dentro de los marcos del sistema, en un proyecto reformista que postulara la distribución de la riqueza social y la conciliación entre trabajadores y empresarios. A esto último apuntaba la CGE.¹²

El golpe interno que depuso a Onganía, en junio de 1970, marcaba la profundidad de la crisis de régimen. Se abría en el horizonte la posibilidad de una apertura democrática, y esto aceleró las negociaciones entre fuerzas políticas y corporativas para preparar ese proceso. En este marco, se acentuó la confluencia entre la CGE y la CGT. A partir de ese momento, representantes de ambas entidades comenzaron a reunirse periódicamente para estudiar en conjunto los problemas económicos y sociales del país.¹³

Esta confluencia en el terreno corporativo de la CGE y la CGT era la primera manifestación de la resurrección de la alianza reformista, relegada a posiciones marginales en los años previos. En el terreno político, el lanzamiento de “La hora del pueblo” ponía nuevamente en carrera al Peronismo para asumir la dirección de esa alianza, y de la transición democrática que comenzaba a abrirse paso. Desde la presidencia, recogiendo el guante, lanzó el Gran Acuerdo Nacional, un plan de transición democrática que contemplaba (con algunas restricciones) la participación electoral del Peronismo, hasta ese momento proscrito.¹⁴ Demostrando su voluntad de poder, tras asumir Lanusse, la CGE y la CGT asistieron a una entrevista conjunta con el nuevo mandatario, a la que llevaron su propuesta de establecer una “tregua social” en la que empresarios, trabajadores y gobierno acordaran

¹²La Nación, 28/10/1969.

¹³La Nación, 14/8/1970.

¹⁴O'Donnell, El estado burocrático..., pp. 292-308.

las condiciones para sobrellevar la transición.¹⁵ Era una propuesta similar a la que, de la mano de ambas corporaciones, puso en marcha el gobierno peronista en 1973.

El ascenso de la alianza reformista desató distintas reacciones al interior de la clase dominante. Por un lado, algunos sectores del empresariado comenzaron a acercarse a la CGE. Ese fue el caso de algunas cámaras provinciales y líneas internas de la UIA. Por otro lado, el ascenso de la CGE encontró la oposición de algunos de los sectores más concentrados de la burguesía local. Su protagonismo político creciente desató reacciones hostiles en los sectores del capital rural, comercial y financiero que dominaban ACIEL, y también dentro de la UIA, en donde la rivalidad entre “reformistas” y “liberales” pronto derivó en una crisis interna.

La Unión Industrial: de la reacción al reformismo

Como señalamos, las tensiones políticas de la etapa que avivaron el conflicto interburgués afectaron particularmente a la UIA. Dentro de esta corporación, la puja entre reaccionarios y reformistas activó disputas internas que enfrentaban a la dirección, compuesta por los capitales más grandes a escala nacional que podían beneficiarse de cierto grado de apertura comercial por la posibilidad de importar bienes de capital, y a una base de capitales mucho más débiles, que demandaban protección. Entre 1966 y 1969 había primado la estrategia de los capitales grandes, plasmada en la permanencia de la UIA en ACIEL, que respaldó el programa de Krieger Vasena. Tras el Cordobazo, ésta línea siguió siendo dominante, aunque al poco tiempo comenzaron a aflorar los cuestionamientos de los capitales más débiles que a la larga terminaron imponiéndose, forzando la ruptura de ACIEL.

La insurrección en Córdoba modificó la relación de fuerzas entre capital y trabajo. Aunque tíbicamente, el gobierno militar comenzó, a partir de 1969, a realizar algunas concesiones al movimiento obrero para reencauzar la situación. La UIA, al igual que ACIEL, comenzó a impugnar cualquier atisbo de “cambio de rumbo”. En este marco se inscriben las críticas de la entidad a los aumentos salariales concedidos tras el Cordobazo señalando que iban más allá “del deterioro sufrido por el salario real”, y que así se hacía “difícil el mantenimiento

¹⁵Ibid., pp. 319-320.

de una política salarial compatible con la contención de la inflación.”¹⁶ Para ACIEL, una apertura de negociaciones paritarias debía ser precedida de una corrección de “la estructura jurídica de las asociaciones profesionales”, ya que su poder de negociación sindical mantenía un elemento “distorsivo” que hacía inviable la convocatoria. Demandaban un profundo avance sobre la organización sindical de los trabajadores que les quitara las herramientas de presión que les permitirían obtener mejoras.¹⁷

El desarrollo de la crisis de régimen acentuó los coqueteos oficiales con el reformismo. Ante la profundización de los conflictos sociales, Onganía fue forzado a dimitir y su lugar fue ocupado por Levingston, un general de filiación nacionalista que buscó revivir un proyecto populista. Su gestión comenzó con una devaluación de la moneda y el aumento de las retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios. Caracterizando que la devaluación apuntaba a aumentar los ingresos del fisco, que serían destinados a incrementar los gastos sociales, la UIA condenó el rumbo que tomaba Levingston.¹⁸

Su posición ante los aumentos salariales llevaba a la UIA a confrontar abiertamente con el programa propuesto por el tándem CGE-CGT, y por extensión, con el Peronismo. En respuesta al documento elaborado por las corporaciones reformistas en septiembre de 1972, la UIA suscribió un documento elaborado en conjunto con sus aliados de ACIEL (SRA, CAC y la Bolsa de Comercio), que presentaron ante Lanusse. Allí rechazaron, en particular, la propuesta de elevar los salarios, argumentando que la espiral inflacionaria desatada provocaría el quiebre de muchas empresas, generando desocupación.

A raíz de este documento haría eclosión una crisis interna que se venía procesando en el interior de la UIA. El centro de la disputa pasaba por un conjunto de capitales que venían pujando por acercar a la UIA a los postulados reformistas encarnados en la alianza CGE-CGT, que disputaban la dirección a los grandes capitales que bregaban por mantenerse dentro de la fuerza social reaccionaria que tenía en ACIEL su punta de lanza. Un primer momento de conflicto se disparó a raíz de un proyecto de promoción industrial promovido por el gobierno en 1971. El presidente de la UIA, Elvio Coelho, se mostró favorable a la

¹⁶UIA: Memoria y Balance, 1969/1970.

¹⁷Cronista Comercial, 26/8/1969.

¹⁸La Nación, 23/6/1970.

iniciativa.¹⁹ Sin embargo, una de las cámaras más poderosas en el seno de la entidad, ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina), manifestó sus temores ya que el proyecto encerraría “una peligrosa acentuación del intervencionismo estatal” y el cierre de importaciones de bienes de capital.²⁰ Este cuestionamiento iba en sintonía con los planteos reaccionarios encarnados en ACIEL, y demuestra que la dirección de la UIA intentaba conciliar en su seno dos tendencias contrapuestas: la de los capitales más débiles que demandaban protección del mercado interno, y la de los más grandes, que exigían “liberalizar” la economía para importar sin restricciones maquinarias e insumos. Por esa razón, los cuestionamientos “por derecha” tuvieron su contraparte “por izquierda”. En una línea opuesta a ADIMRA, y en clara discusión con la dirección nacional, se posicionó un nutrido grupo de empresarios que objetaban la promoción de capitales extranjeros e importaciones irrestrictas: Cámara Argentina de la Industria Electrónica (CADIE) y Asociación de Industriales de Córdoba (ADIC). En agosto del mismo año, en Mendoza, otro núcleo acordó conformar una entidad independiente que bregara por los intereses de los empresarios del interior, desoídos por los dirigentes capitalinos.²¹ En este contexto, la declaración suscripta por la UIA junto a otras corporaciones de ACIEL, que cuestionaba la propuesta de aumento salarial propiciada por la CGE en septiembre de 1972, terminó precipitando la crisis. Pocos días después de esta declaración, se desafilió de la UIA la Unión Industrial de Santa Fe. Tras el cisma, la UIA se inclinó hacia la propuesta de “aumentos razonables de salarios”, y se hizo pública su voluntad de abandonar ACIEL.²² Su salida terminó formalizándose a comienzos de octubre,²³ y sus posiciones posteriores, demandando aumentos salariales y “reconsiderando” positivamente la intervención del Estado en la economía, dieron cuenta de la ruptura con la alianza “liberal” y el acercamiento al campo reformista.²⁴

¹⁹La Nación, 3/7/1971.

²⁰Cronista Comercial, 5/7/1971.

²¹Cronista Comercial, 2/8/1972.

²²Cronista Comercial, 15/9/1972.

²³La Opinión, 11/10/1972; Cronista Comercial, 11/10/1972.

²⁴Cronista Comercial, 31/12/1972.

La disolución del frente agropecuario

La histórica división entre las corporaciones agrarias, entre pequeños capitales arrendatarios y grandes terratenientes, era, hacia mediados de los '60, cosa del pasado. Una serie de transformaciones estructurales habían atenuado las diferencias entre las explotaciones de mayor y menor tamaño. En primer lugar, estaba operando desde la década de 1940 una tendencia a la desaparición del arriendo “tradicional”. Muchos pequeños arrendatarios habían logrado acceder en esos años a la propiedad de la tierra, mientras que una cantidad no menor había sido expulsada de la producción. Hacia los '60, se había reducido considerablemente el número de arrendatarios “puros”, es decir, de aquellos que solo accedían a la tierra mediante el arriendo, predominando aquellos que combinaban la propiedad de la explotación con superficies arrendadas para aumentar su escala. A su vez, por efecto de la concentración de la producción, se había reducido el número de las pequeñas explotaciones: los “chacareros” habían aumentado la superficie en explotación (o debieron retirarse de la actividad). Sin embargo, la concentración no determinó un aumento de las grandes explotaciones, sino una mayor presencia de los estratos medios. Es que las grandes propiedades también estaban en un proceso de desaparición por efecto de la herencia y de la reconversión hacia la agricultura, que demandaba menos superficie que la ganadería.²⁵

A raíz de estos procesos, las explotaciones agropecuarias habían adquirido mayor homogeneidad, desapareciendo muchas de las contradicciones que antaño habían enfrentado internamente a las diferentes capas de la burguesía rural. A nivel corporativo, esto se expresó en una tendencia a la confluencia de las organizaciones rurales, que cristalizó por diversos factores durante la Revolución Argentina. El plan Krieger Vasena, que estableció retenciones a las exportaciones agropecuarias que compensaban los beneficios de la devaluación, generó la oportunidad política para una confluencia potencialmente inscripta en las transformaciones estructurales. La defensa de la renta

²⁵Estos procesos han sido documentados por una profusa bibliografía, en la que se destaca Barsky, Osvaldo (Ed.): El desarrollo agropecuario pampeano, GEL, Buenos Aires, 1991.

diferencial de la tierra, un ingreso extraordinario que la burguesía agropecuaria se arrogaba para sí, fue lo que soldó la unidad corporativa del agro. Entre 1967 y 1969, las entidades agrarias comenzaron a manifestar coincidencias en sus reclamos contra los distintos mecanismos con que el gobierno intentó apropiarse de esa renta para distribuirla hacia los sectores urbanos. Los reclamos contra las retenciones, los impuestos o los controles de precios se convirtieron en moneda corriente. A lo largo del período, las demandas comunes fueron abonando un camino que llevó a las cuatro corporaciones nacionales (SRA, FAA, CRA y CONINAGRO) a una confluencia más orgánica. Primero fueron las reuniones de dirigentes, luego los documentos conjuntos hasta que, a comienzos de la década de 1970, comenzó a discutirse la integración de las cuatro corporaciones en un frente agropecuario. Luego de dos asambleas multitudinarias, en las que delegados de las cuatro corporaciones discutieron un programa común, a fines de 1970 terminó conformándose la Comisión de Enlace. El acuerdo programático que los unía se centraba en combatir cualquier intento de apropiación de renta, por la vía de retenciones, impuestos, sobrevaluación cambiaria o controles de precios.²⁶ Como la industria local, incapaz de competir por sus propios medios en el mercado mundial, dependía de las transferencias de renta para su sustento, el programa agrario apuntaba a una profunda concentración del capital. Abogaba por la liquidación de las industrias más débiles, por el achicamiento de la estructura burocrática del Estado y por el fin de las transferencias hacia la clase obrera. Era, en sí, un programa profundamente anti-popular y opuesto a cualquier forma de reformismo, que solo podría imponerse de la mano de una profunda ofensiva represiva.²⁷ Sin embargo, la unidad que le daba vida no sobrevivió al proceso de crisis de régimen y al ascenso de la alianza reformista. Frente a la nueva coyuntura política, la burguesía agraria se dividió nuevamente.

²⁶CRA, SRA, FAA, CCEA y CONINAGRO: “El agro y el desarrollo nacional. Conclusiones”, Buenos Aires, 17 de noviembre de 1970.

²⁷Hemos desarrollado este proceso en el artículo “La historia negra de Federación Agraria Argentina. La intervención política de los ‘chacareros’ entre Onganía y Videla (1966-1976)”, en Razón y Revolución, n° 24, diciembre de 2012.

Los caminos divergentes que tomaría la burguesía agropecuaria comenzaron a insinuarse en los balances contrapuestos que hicieron de las insurrecciones de 1969. Sin embargo, no fue hasta que se puso en marcha la transición democrática, en 1971, que la división se concretó. En particular para Federación Agraria, el Cordobazo habilitó un giro en las posiciones políticas sostenidas por la entidad. Hasta ese momento, el eje de su crítica a la política económica de Onganía y Krieger Vasena había pasado por la necesidad de profundizar el rumbo “liberal”, acentuando el ajuste de los gastos estatales, manteniendo a raya a los sindicatos y avanzando en la eficiencia del entramado industrial. Detrás de ello, y coincidiendo en este punto con el resto de las corporaciones agrarias, se encontraba la exigencia de una reducción sustantiva de las transferencias de renta hacia otros sectores. Pero el balance hecho tras la insurrección de Córdoba difería sustancialmente con estos planteos. En un documento elevado a Onganía a principios de julio de 1969, FAA criticaba la orientación económica “monetarista”, que impuso una estabilización con altos costos sociales, a la que achacaba el estallido social. Demandaba un giro hacia el “estructuralismo” y la puesta en marcha del demorado “tiempo social”.²⁸

No es casualidad que haya sido FAA la primera en renegar de su apoyo a la política “liberal”. Era su forma de reaccionar ante el proceso de concentración y centralización de la economía, que afectaba particularmente a las capas más débiles de la burguesía agraria, nucleadas en su seno, expulsándolas de la producción. La crítica a la línea “monetarista” de Krieger Vasena y sus sucesores, escondía la demanda de una intervención para contener estas tendencias. A ello se sumaba el temor frente al peligro de eclosión social, que políticas de corte reformista podrían ayudar a contener.

Muy distinto era el balance que hacía SRA de los estallidos insurreccionales. A diferencia de lo que caracterizaba FAA, la protesta sería “injustificada” y producto de “extremistas” y “provocadores”.²⁹ O sea, la violencia era externa a la sociedad, y no el resultado de un pueblo cansado de los costos que imponía la política económica. Tras el alejamiento de Krieger Vasena, la Sociedad Rural y CRA, junto a sus socios de ACIEL, demandaron que se mantuviera el rumbo económico, y criticaron a quienes propiciaban el abandono de los

²⁸La Tierra, 2/7/1969.

²⁹Memoria de la Sociedad Rural Argentina 1968-1969, p. 63.

lineamientos seguidos hasta ese momento en pos de un “estatismo” que terminaría derivando en el “colectivismo” que promovía el desorden y la protesta social.³⁰ Los coqueteos con el nacionalismo de Levingston y Lanusse fueron denunciados como un “proceso de socialización económica”.

Pero Federación Agraria, que había compartido la crítica “liberal” hasta 1969, comenzaban a tomar distancia de estos planteos. Más allá de la ambigüedad, tímidamente se iba arrojando a la alianza reformista que se reconstituía y cobraba fuerza. Hacia 1971 ese acercamiento se consumó. Con su nuevo presidente, Humberto Volando, FAA incorporaba nuevos tópicos que reforzaban un discurso nacionalista y reformista que encajaba perfectamente con los vientos que comenzaban a soplar. En los primeros meses de 1972 demandó el retorno a los cauces democráticos y criticó la orientación económica “liberal”, que beneficiaría exclusivamente a los grandes capitales nacionales.

Atención particular recibió en este período la violencia política creciente. Continuando con una línea marcada por intervenciones anteriores, FAA enfatizó en que, para erradicar la violencia, había que apuntar a desmontar las causas que la engendraban, en particular, la orientación económica del gobierno. A su vez, destacaba la importancia del diálogo entre sectores, y sobre todo, la necesidad de hacer concesiones para contener la radicalización de las masas. Los sectores empresarios deberían “resignar algunas de las cosas que legítimamente poseen, si con ello facilitan el acuerdo que en definitiva servirá para bien de todos.”³¹ Así, de la mano de un proyecto reformista que instrumentara las concesiones, podría encauzarse la violencia política dentro de los marcos del sistema.

La impronta que adquiriría la salida reformista influyó también sobre algunos posicionamientos de CRA, que coqueteaba con el reformismo y tomaba distancia de ACIEL y SRA, sin alinearse abiertamente con sus antagonistas. Ello se evidenció en algunas de las medidas propuestas a mediados de diciembre de 1971, “ante el agudo proceso de deterioro económico”. Proponía por ejemplo “reactivar la expansión económica”, “promover la descentralización industrial” y el “mantenimiento de los salarios reales como condición para fortalecer el consumo interno, permitiendo el crecimiento de la

³⁰Cronista Comercial, 4/7/1969; La Nación, 23/7/1970.

³¹La Tierra, 30/3/1972.

actividad de la empresa nacional a niveles óptimos”.³² Las posiciones asumidas por la entidad contrastaban notoriamente con las de ACIEL y coincidían con la línea propuesta por Lanusse, a la que CRA se acercaba.

Lo que hasta 1971 fueron balances contrapuestos, se convirtió en un enfrentamiento abierto al año siguiente. En el marco de una disputa que cruzaba la sociedad por las características que asumiría la transición, en enero de 1972 la CGE lanzó una ofensiva convocando a medidas de fuerza que escondían, detrás de los reclamos corporativos, el intento de imponer una restauración democrática sin restricciones. Tras realizar un balance crítico de la coyuntura política y económica, FAA respaldó abiertamente las medidas convocadas por CGE, coincidiendo en la necesidad de fortalecer a las pequeñas industrias y “elevar el poder adquisitivo de los sectores populares”.³³ Frente a las objeciones provenientes del arco liberal, FAA defendió a la CGE de sus detractores, señalando que quienes criticaban las medidas de fuerza “prefieren resguardar sus privilegios de hoy a salvaguardar en su integridad el cuerpo social”.³⁴ Acompañando la ofensiva de la CGE, en marzo de 1972 Federación Agraria se lanzó a convocar medidas de fuerza, realizando actos y asambleas en distintos puntos del país.³⁵

Otro punto que dividía aguas entre reaccionarios y reformistas era el de la propiedad privada de la tierra. El programa elaborado por la CGT y la CGE, en sintonía con los planteos del Peronismo, contemplaba realizar una “reforma agraria” para poner en producción las “tierras ociosas” o “deficientemente explotadas”. Se ponía en cuestión la propiedad privada de la tierra, anteponiéndole el principio de su “función social”. De esta manera, la fuerza que gobernaría el país se arrogaba la potestad de expropiar terrenos si sus propietarios no cumplían con la premisa de hacerlos producir a su máximo potencial. FAA, que había relegado el reclamo de la “reforma agraria” a segundo plano en su “etapa liberal”, lo retomó en 1972 con la presentación de un proyecto para atacar el problema de las tierras ociosas. El instrumento establecía que todo propietario estaba obligado a

³²La Nación, 15/12/1971.

³³La Tierra, 27/1/1972.

³⁴La Tierra, 3/2/1972.

³⁵La Nación, 1/4/1972 y 9/4/1972; La Tierra, 6/4/1972.

“realizar una explotación racional” de la tierra, a fin de elevar su productividad. Y frente a la existencia de predios que no cumplieran con esta condición, se facultaba al Poder Ejecutivo para disponer de esas propiedades y entregarlas forzosamente en arriendo.³⁶ El derecho de propiedad privada quedaba así subordinado al principio de la “función social de la tierra”, “en la medida en que esta atiende a los superiores intereses de la comunidad”.³⁷

El problema de la tierra estaba íntimamente conectado con la transición democrática en marcha: en él se jugaba la profundidad del giro reformista que asumiría el futuro gobierno y la magnitud de las concesiones a hacer para evitar el desborde de las masas que giraban a la izquierda. No por casualidad buena parte de los partidos que se preparaban para la contienda electoral habían levantado la consigna de la reforma agraria en sus programas. Como expresó el presidente de Federación Agraria, su proyecto apuntaba abiertamente a dar contención a la conflictividad social: “soy un pequeño propietario [pero] prefiero esta solución a que mañana me sorprenda una invasión de campos por parte de trabajadores sin tierras.”³⁸ La reforma agraria, en los términos propuestos por Federación Agraria, era una concesión fundamental en pos de obtener la “estabilidad política”. Es decir, una forma de conjurar la radicalización de las masas. Quienes, como Sociedad Rural, se negaban a realizar estas concesiones serían por ello responsables de la crisis política y social que vivía el país: “la difícil situación por la que estamos atravesando es la resultante del manejo del poder por grupos minoritarios no dispuestos a despojarse por su propia voluntad de sus privilegios”.³⁹

Los dirigentes de CRA y SRA salieron a cuestionar el proyecto, acusando a FAA de incentivar un debate que dividiría el frente agrario. Se posicionaron por una defensa irrestricta de la propiedad privada de la tierra y acusaron a los partidos políticos que apoyaban el proyecto de “generar incertidumbre” y perturbar la actividad privada.⁴⁰ En una conferencia de prensa celebrada en septiembre, Luis Firpo Miró, presidente de SRA,

³⁶La Tierra, 18/5/1972.

³⁷La Tierra, 6/7/1972.

³⁸La Tierra, 20/7/1972.

³⁹La Tierra, 3/8/1972.

⁴⁰Cronista Comercial, 29/7/1972.

manifestó sus temores a que un futuro gobierno de tinte reformista avanzara sobre la propiedad privada en el campo, asimilando estas posiciones a la revolución social.

El tema había adquirido tal relevancia que hasta se coló en la interna de la Sociedad Rural, con la presentación de una lista opositora a las elecciones en las que se renovaría la comisión directiva y la presidencia, un hecho inédito en la vida institucional de la entidad. Más aún lo eran los términos en los que se planteó la disputa, en la que la lista opositora retomaba propuestas esbozadas por Federación Agraria, como la “función social de la tierra” o la necesidad de una “economía concertada”, elementos del programa reformista que agitaba a su vez el Peronismo. En solicitadas y actos públicos la lista opositora había planteado la necesidad de que los productores asumieran “mayor responsabilidad social”, para dar respuesta a las necesidades de las masas y satisfacer los reclamos de “justicia social”.⁴¹ Las entidades gremiales empresarias y obreras debían comportarse “no como grupos de poder para lograr beneficios sectoriales sino como armonizadoras del esfuerzo al servicio del interés general”. De allí se derivaba un planteo que sintonizaba con la “política concertada” obrero-patronal planteada desde el Peronismo: “la concertación entre todos los sectores y regiones de la comunidad nacional con el Estado, para la elaboración de planes de política económica y social aceptados y luego apoyados por todos.”⁴² La lista opositora cuestionaba también la defensa incondicional de la propiedad de la tierra, enfatizando la necesidad de anteponer su “función social”.⁴³

Aunque en los comicios se impuso la lista oficial, eso no restaba importancia a la formalización de una oposición “reformista” a la dirección de SRA, que se alzó con tres vocalías suplentes en la Comisión Directiva.⁴⁴ Las elecciones tuvieron una alta participación: votaron 5.314 socios de los 9.700 habilitados, un número considerablemente mayor a los 3.000 ó 4.000 de una elección “normal”. La lista oficial obtuvo 3.147 escaños, contra 2.126 de la oposición.⁴⁵ Es decir que un 40% de los votantes respaldaron un cambio

⁴¹Palomino, Tradición y poder..., op. cit., p. 67.

⁴²Citado por Palomino, Tradición y poder..., op. cit., p. 67.

⁴³La Nación, 1/9/1972.

⁴⁴Palomino, Tradición y poder..., op. cit., p. 68.

⁴⁵Cronista Comercial, 28 y 29/9/1972.

de dirección que hubiera ubicado a la Sociedad Rural en el campo del reformismo. Es imposible no ligar este hecho absolutamente excepcional a una coyuntura política en la que, la profundización del proceso revolucionario ubicaba al Peronismo como única alternativa viable para contener la radicalización social, que ponía en peligro la continuidad de las relaciones de producción capitalistas.

El retorno de Perón

Como hemos visto, la crisis de régimen abierta en 1969, y la radicalización de las masas que amenazaba las bases del capitalismo argentino, reabrieron la fractura de la clase dominante que pareció clausurar la dictadura de Onganía. La alianza reformista, barrida del escenario político por la “ofensiva liberal” de 1966, resucitó para constituirse en la alternativa de buena parte de la burguesía local al “caos social” que perfilaba en el horizonte. La CGE, “pata empresaria” de la coalición, abandonó el segundo plano para salir a batallar por el programa reformista, la restauración democrática y el retorno de Perón. La alianza trazada con la CGT, que elaboró el núcleo del programa de gobierno peronista, constituyó la base de la fuerza social que se alzó con el gobierno en 1973.

La nueva coyuntura política, y la ofensiva del reformismo, socavaron las bases de la fuerza reaccionaria en la que se apoyó la dictadura de Onganía. Los elementos más débiles de esa alianza, golpeados por la política liberal, fueron abandonando el campo de la reacción para sumarse al reformismo. La crisis de la alianza reaccionaria comenzó con cuestionamientos internos en la UIA, que ante la amenaza de su desmembramiento, terminó abandonando ACIEL para acercarse a las posiciones reformistas. Ya en 1973, la entidad respaldó abiertamente el Pacto Social implementado por Gelbard, defendió al gobierno peronista e hizo propio el discurso reformista. Su acercamiento a ese polo quedó plasmado en la fusión con la CGE, que terminó concretándose a comienzos de 1974. Su adscripción al reformismo se mantuvo hasta que la caída de los precios internacionales de los precios agrarios, que comenzó a fines del '74, hizo naufragar el Pacto Social. Para ese momento, incluso algunos sectores empresarios nucleados históricamente en la CGE comenzaron a abandonar el reformismo para sumarse a la ofensiva que desembocó en el golpe de 1976.

En la burguesía agraria, la crisis de régimen y la ofensiva reformista fracturaron el frente formado para combatir por derecha la política de Krieger Vasena. FAA y CONINAGRO modificaron sustancialmente su discurso para hacer propias las banderas del reformismo y acercarse a la CGE. Para 1972, ambas corporaciones se habían sumado abiertamente a la alianza peronista, lo que le valió la conquista de puestos claves en la administración de Cádiz. Como en el caso de la UIA, la ofensiva reformista avivó conflictos internos que afectaron incluso a la “oligarquía” tradicionalmente antiperonista, nucleada en CRA y SRA. En estas corporaciones aparecieron líneas internas filo-reformistas, que aunque no lograron conquistar la dirección, tuvieron influencia suficiente para forzar el respaldo de estas corporaciones al plan económico de Gelbard. No sin resquemores, SRA y CRA saludaron la implementación del Pacto Social y aceptaron la rebaja de los precios agropecuarios como “contribución” al sostenimiento del plan. Incluso llegaron a suscribir un Acta de Compromiso con el gobierno peronista que avalaba las principales medidas para el agro, como la estatización del comercio de granos y las reformas tendientes a promover la “función social de la tierra”. Aunque no faltaron cuestionamientos internos a este giro, ni siquiera en FAA y CONINAGRO, el gobierno peronista había conseguido el apoyo (condicionado y parcial) de una parte no menor de la “oligarquía”.

Resulta imposible explicar el retorno del peronismo prescindiendo de estos realineamientos en el seno de una clase dominante que avaló la proscripción durante casi 20 años. A su vez, estos movimientos no se pueden explicar sin tener en cuenta algunos elementos de la coyuntura. En primer lugar, el ascenso de la lucha de clases, imposible de contener dentro de los marcos del sistema sin habilitar concesiones políticas y económicas: la apertura democrática sin proscripciones y la implementación de políticas reformistas. Pero a su vez, estas “concesiones” no hubieran sido posibles sin una coyuntura económica que las hiciera viables: el ingreso de una masa de renta producto del fuerte aumento de los precios internacionales agrarios registrados entre 1971 y 1973.